

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023), la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **NELCIO DE JESÚS SANTA SANTA** contra la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante **PROTECCIÓN S.A.**), dentro del proceso tramitado bajo el radicado único nacional No. 05001-31-05-022-2018-00393-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, el demandante pretende que se declare que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de su hijo **ROBINSON ALEXANDER SANTA SUAZA**, desde el momento de su deceso el 21 de febrero de 2014; intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, adicionalmente que las mesadas pensionales sean indexadas al momento del pago y costas procesales.

Como fundamento de sus pretensiones, manifiesta el demandante que su hijo, **ROBINSON ALEXANDER SANTA SUAZA** se encontraba afiliado en pensiones en **PROTECCIÓN S.A.** como cotizante y que falleció el 21 de febrero de 2014, alcanzando a cotizar un total de 143 semanas en los tres últimos años anteriores al deceso.

Afirma que convivía con una hija quien estudiaba y con su hijo en el mismo hogar, y que, por eso en vida de **ROBINSON**, este contribuía a sufragar la mayoría de los

gastos que demandaba su núcleo familiar, entre ellos, servicios públicos, alimentación y demás necesidades requeridos para el diario vivir, pues si bien el aportaba para los gastos, su trabajo no era estable y ganaba menos del salario mínimo.

Continuó contando que el joven Robinson no tenía esposa, ni compañera permanente, ni procreó hijos, y que su madre SOCORRO ELENA SUAZA, había fallecido desde el año 2009, así que el causante vivía únicamente con él y su hermana quienes dependían de Robinson, casi en su totalidad.

Aducen que solicitó a la demandada la pensión de sobrevivientes, la que le fue negada mediante decisión del 22 de octubre de 2014, por considerar que no dependía económicamente de su hijo fallecido, cuando la realidad era otra, pues vivía y dependía de su hijo y con su deceso desmejoró su calidad de vida.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del veinticinco (25) de septiembre de 2020, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de fondo propuesta por PROTECCIÓN S.A. denominada “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, y como consecuencia de ello, absolvió a la entidad accionada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Impuso costas a cargos del demandante y a favor de PROTECCIÓN S.A.

Para fundamentar su decisión, el juez argumentó que la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que una vez fallecido el causante y extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de este último se vea amenazada en importante nivel, al punto de poner en riesgo las condiciones de vida digna, por lo que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica, y que en el caso concreto no se cumple las previsiones señaladas en la Ley, pues de las afirmaciones del actor contenidas en los hechos de la demanda, según las cuales su hijo en mayor medida y él sostenían económicamente el hogar, conformado por ellos dos y la otra hija del actor, no se aportaron pruebas al respecto, por lo que las afirmaciones del actor contenidas en la demanda difieren de prueba allegada en el litigio.

Así mismo indicó el juez que no se convence de la dependencia económica afirmada por el actor, a partir de la prueba testimonial practicada, al encontrar incoherencia en los testimonios brindados por las declarantes.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial del demandante, argumentando que, si bien se allegó toda la prueba al expediente junto con los documentos de la investigación administrativa, el juez dejó de lado la valoración debida de todas las circunstancias familiares y sociales que rodeaban al grupo familiar del actor, pues todos los testimonios y pruebas allegadas permitían concluir que se trataba de un entorno familiar de condiciones económicas bajas, además indicó que todas las pruebas fueron asertivas al indicar que Robinson era el encargado de asumir los gastos económicos en su grupo familiar.

No comparte el abogado el argumento del *a quo*, que hay inconsistencias en determinar cuáles fueron los valores que asumía Robinson para su grupo familiar, dado que la discrepancia fue en torno a si se pagaba una suma u otra de arriendo, frente a una época en la cual el SMLMV se encontraba en \$616.000, sin embargo, ninguna de las pruebas le otorgó elementos suficientes al despacho para determinar que los ingresos del grupo familiar hubieren sido mayores a dicho valor.

Arguye que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indica que no es suficiente ni siquiera que el grupo familiar tenga ingresos de un salario mínimo para demostrar que ya había solvencia en el pago de los gastos mínimos, sin embargo, se descarta la dependencia económica al indicar que supuestamente hay ingresos cercanos al SMLMV, pero no se logra demostrar que el demandante tuviera ingresos de un SMLMV para un grupo familiar que estaba compuesto por 3 personas.

Indica que al estar establecidas las circunstancias previas de la Sentencia C-111 de 2006, las condiciones para el demandante después de la muerte del causante fueron desfavorables en el sentido que tuvo que modificar su lugar de residencia, razón por la cual hay una carencia notable por parte del demandante en cuanto al sostenimiento económico del hogar, por lo que no son de recibo las argumentaciones del juez donde se indicó que no había una dependencia económica absoluta, adicionalmente no tuvo en cuenta en debida forma los testimonios rendidos debido a unas supuestas inconsistencias en lo dicho, pero lo cierto es que se reciben

testimonios de dos personas, que dan cuenta de los gastos por los que respondía el causante como lo era el pago del arriendo, entre otros.

Finaliza exponiendo que el apoderado de PROTECCIÓN S.A. instigó irregularmente a los testigos, por lo que le solicita el Tribunal revisar el video de la audiencia donde en varias ocasiones este les indicó a los testigos que dependiendo de sus respuestas podían incurrir en un delito, por lo que esto implicó instigación a los testigos que no fue controlada en debida forma por el juez de instancia, por lo que los testigos respondieron de manera presionada a las preguntas, empero las respuestas fueron genuinas y claras, por lo que lo solicita al Tribunal hacer una valoración de los testigos en su concepto real, que pueden dar cuenta de la situación familiar y económica brindada por el causante.

Manifiesta que se deben tener en cuenta los pronunciamientos reiterados por la CSJ y el TSM, donde establecen que las personas que conocen este tipo de situaciones por tener cercanía a las personas involucradas en la dependencia económica, son las únicas que pueden dar cuenta acerca de dichas circunstancias internas, por lo que se debe tener en cuenta lo manifestado por estas.

Aduce que hace especial vehemencia en el hecho que hubo una coherencia total, en cuanto a todo lo probado en el proceso, incluso todo lo que PROTECCIÓN en su investigación privada aportó, teniendo en cuenta que lo aportado por esta entidad no fue corroborado por las partes, ni emitido por una entidad policiva, administrativa o judicial por lo que era un documento que no tenía fuerza probatoria total, sin embargo, existe una coherencia suficiente para establecer que la dependencia económica establecida en la Sentencia C-111 de 2006, existió, por lo que solicita al Tribunal Superior de Medellín revocar la sentencia, y en su lugar condenar al pago de la pensión de sobrevivientes, más los intereses moratorios.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado de PROTECCIÓN S.A. allego escrito de alegatos, en el que señaló textualmente, lo siguiente:

“Presento conformidad con la decisión adoptada por el A quo teniendo en cuenta que conforme quedó acreditado en el proceso el demandante no tenía dependencia económica respecto de su hijo fallecido. Por el contrario, de sus propios dichos, lo

cual, ratifica la información previa con que contaba Protección S.A., se extrae que el demandante generaba sus propios ingresos, que incluso eran superiores y que el aporte del causante era para su propio sostenimiento como CONFIESA EXPRESAMENTE.

Asimismo, pudo constatar el A quo que de mala fe el demandante ocultó que realmente convivía con su compañera permanente y no con el causante.

Razones que en sí mismas bastan para CONFIRMAR íntegramente la providencia estudiada.

Finalmente, deberá tenerse en cuenta que la parte demandante no sustentó el recurso de apelación dentro del término de traslado del auto que admite la apelación, situación que deberá ser analizada al momento de proferir decisión de segunda instancia.

#### **SOLICITUD.**

Con base en lo expuesto, se solicita al Honorable Tribunal CONFIRMAR íntegramente la decisión de primera instancia, absolviendo a Protección de todas las pretensiones de la demanda.”

#### **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:**

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer, si el afiliado fallecido ROBINSON ALEXANDER SANTA SUAZA, dejó consolidados los requisitos legales para que sus beneficiarios adquirieran el derecho a la pensión de sobrevivientes; en caso de ello resultar acertado, determinar si actor probó ostentar la calidad de beneficiario de la pensión demandada, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación de las condenas.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

#### **6. CONSIDERACIONES:**

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad

social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

A través de la presente acción judicial, el demandante pretende se condene a PROTECCIÓN S.A., a reconocerle y pagarle pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su hijo ROBINSON ALEXANDER SANTA SUAZA, ocurrido el 21 de febrero de 2014 (03.2018-00393Anexosdemanda fl.9), de quien manifiesta dependían económicamente.

Inicialmente debe indicarse, que la norma legal vigente para el momento del deceso del causante que regula la pensión de sobrevivientes y por lo tanto aplicable al caso que nos ocupa, es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el que, en lo atinente a los beneficiarios de la citada pensión, dispone que, entre otros, tendrán derecho los padres del causante si dependían económicamente de éste.

Respecto de la dependencia económica de los padres, la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006, señaló que implica que debe existir una relación de sujeción en lo atinente a la ayuda pecuniaria del hijo, aunque ello no excluye que aquellos puedan percibir rentas o ingresos adicionales, a condición que estos no sean suficientes para garantizar su independencia económica, es decir, que esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida.

Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha identificado como elementos estructurales de la referida dependencia económica: i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo.

La referida Corte, en sentencia SL12185-2016 del 17 de agosto de 2016, indicó que:

*“...la dependencia económica es una situación que debe ser definida en cada caso particular y concreto, a fin de determinar si los ingresos que perciben los progenitores son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento y necesidades básicas, en cuyo caso no se configura el presupuesto legal para acceder a la prestación pensional, al paso que si son precarios o insuficientes para proveerse de lo necesario, al punto que el apoyo o ayuda, así sea parcial, del hijo o hija es determinante para llevar una vida en condiciones dignas, es*

*cuando puede pregonarse la dependencia fundamental del beneficiario respecto de la causante.”*

*“Puesto en otros términos, no es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba”.*

(En el mismo sentido, ver sentencias, SL816-2013, SL2800-2014, SL3630-2014, SL6690-2014 y CSJ SL14923-2014, CSJ SL18517-2017 y CSJ SL1243-2019, entre otras).

En relación con lo anterior, encuentra la Sala, que la controversia en este litigio entre el demandante y la demandada PROTECCIÓN S.A., tiene que ver con la demostración de la dependencia económica del accionante respecto de su fallecido hijo, arguyendo básicamente PROTECCIÓN S.A., que el actor sin el aporte del causante, puede subsistir en condiciones dignas.

Respecto de la anterior controversia, es importante resaltar que, en este caso, al señor NELCIO DE JESÚS SANTA SANTA, mediante comunicación del 24 de octubre de 2014, le fue negada la pensión de sobrevivientes por parte de PROTECCIÓN S.A., (03.2018-00393Anexosdemanda fls.11 y 12) con el siguiente argumento:

*“No procede el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en favor de Nelcio de Jesús Santa Santa, en calidad de padre, teniendo en cuenta que al momento del fallecimiento del afiliado y de acuerdo con el trámite administrativo adelantado por PROTECCIÓN S.A. se constató que el padre no dependía económicamente del fallecido, ya que fue posible comprobar que sin el aporte del afiliado fallecido, el padre puede subsistir sin ser vulnerado el mínimo existencial.”*

Por lo anterior, pasa la Sala al análisis de la prueba documental, testimonial y de interrogatorio de parte obrante en el proceso, con el fin de verificar el requisito de dependencia económica del padre respecto de su hijo fallecido.

El demandante **NELCIO DE JESÚS SANTA SANTA**, rindió interrogatorio de parte, el cual se encuentra grabado al minuto 22:00 de la Audiencia concentrada del artículo 77 y 80 del CPLy SS, en la que afirmó que para el momento del fallecimiento de su

hijo ROBINSON ALEXANDER, el grupo familiar estaba compuesto por su fallecido hijo, una hija de 14 años y él. Dice que no tenía actividad económica al momento que estaba con vida su hijo Robinson, indicando que era poco el trabajo, y que su hijo llevaba la obligación del hogar. Acto seguido, aclara que para la citada época trabajaba en un botadero de tierra. Continuó afirmando que era cierto lo que había indicado en la investigación realizada por Protección, en la que manifestó que sus ingresos para esa época eran más o menos \$600.00, que los gastos del hogar en ese momento correspondían a arriendo \$150.000 y servicios públicos \$100.000, y que los \$350.000 que le sobraban los destinaba en alimentación. El aporte de Robinson era ayuda en arriendo, servicios y parte de comida. Acto seguido, el abogado cuestiona al interrogado, preguntándole que cuando dice que parte de la comida, el aporte que realizaba Robinson era para sus propios gastos, por la participación que él tenía por su propia convivencia en el hogar, a lo que respondió que es cierto, así era (minuto 30:33-40). Finalizó diciendo que tiene la calidad de cotizante en el sistema de seguridad social, hace más o menos 14 años.

Por su parte, también declaró la testigo **LUZ MARGARITA ARANGO RESTREPO** cuya declaración se encuentra grabada al minuto 37:37 de la Audiencia concentrada del artículo 77 y 80 del CPL y SS, quien manifestó que conoció a Robinson desde que era un niño, porque siempre ha sido de la vereda, sin embargo, advierte que al momento de fallecer Robinson ella vivía en Prado donde llevaba radicada 8 años aproximadamente, regresando a vivir a Caldas cuando ya había fallecido el joven. Afirma que el joven Robinson Alexander al momento de su deceso vivía con su padre, la hermana y la actual esposa del señor Nalcio; cuenta que este grupo familiar vivía en una casa que era de su propiedad (de propiedad de la testigo), pagando el arriendo el joven Robinson quien le cancelaba en efectivo la suma \$300.000 mensuales, sin que tenga soporte de contrato o del pago del canon de arrendamiento, por confiar plenamente en estos inquilinos quienes eran muy honrados. Dice que esta familia estuvo viviendo en su casa hasta el año 2014, porque Nalcio no podía seguir pagando, advirtiéndose que esta fecha es suministrada a la declarante por parte de un tercero que se escucha cuando interviene en la diligencia, cuestionándosele a la testigo quién era la persona que le hablaba, indicando que una vecina, sin embargo, al preguntársele el nombre de la vecina no sabía el nombre. (Minuto 46:55 a 47:14); continuó manifestando la declarante que Robinson le entregaba a ella en efectivo el canon de arriendo, y que cuando ella no lo podía recibir, se lo dejaba con su mamá o hermana, quienes vivían



en la misma vereda que Robinson. **Continuándose con el cuestionario, se le preguntó a la declarante si sabía a cuánto ascendían los ingresos de la familia de Robinson, respondiendo que** Robison le estaba dando el estudio a la hermana y que su padre dependía de él en un todo y por todo, en los servicios, arriendo y comida, situación que dice conocer por ser muy cercana a esa familia. Luego indicó que para la época que murió el señor Robinson, el señor Nelcio trabajaba en una finca en oficios varios, informando que el trabajo del demandante era ocasional, y que por ello era que dependía del hijo. Para finalizar se le pregunta a la testigo si había rendido declaración extra juicio ante notario para el tema de esta prestación, a lo que dijo que nunca lo había hecho (1hora:18), más adelante se retracta y dice que medio recuerda haberlo hecho, por lo que se le indaga porque en esa declaración manifestó que el canon de arrendamiento que se le pagaba por la casa era de \$200.000, valor disímil al suministrado en la diligencia donde expuso que era de \$300.000, aclarando que cuando se alquila una casa, se determina un valor y luego va subiendo cada año, entonces dice que empezó en \$150.000, luego \$190.000, \$200.000 y después subió a \$300.000, informando que el joven Robinson le dijo que no era justo que una casa tan buena estuviera tan favorable, entonces Robinson se puso de acuerdo con el papá que él también aportaba un poco (1:26-47), para pagarle a ella los \$300.000; dice la testigo que la razón de su dicho y el conocimiento de que Robinson era el que velaba por el papá y la hermana, solventando las necesidades de arriendo, mercado y servicios, era porque los visitaba, ya que eran vecinos de su hija y madre.

También declaró la señora **AURA DEL SOCORRO CASTAÑEDA CASTAÑEDA**, cuya declaración se encuentra grabada en la hora 1:53 de la Audiencia concentrada del artículo 77 y 80 del CPLy SS, expresando la deponente que vive en Caldas-vereda el salada- parte baja desde hace 50 años, y que, en razón de vecindad, conoció a Robinson desde pequeño que llegó con la familia al barrio; continuó contando que el joven Robinson al momento de su muerte vivía con el papá y su hermana, en una casa que era propiedad de la señora Margarita, sin saber cuánto pagaban de arriendo, sin embargo afirma que era el joven Robinson quien pagaba todo en su casa, situación que dice saber porque el papá no trabajaba y era el hijo el que veía por él. Continuó contando que luego del deceso de Robinson, el señor Nelcio siguió viviendo en la casa de la señora Margarita por un tiempo, y luego se fueron a vivir a otro lado en la misma vereda. Dice que sabe que en vida de Robinson este era el que pagaba los gastos del hogar, como servicios, arriendo y toda la obligación de la casa, en razón de la vecindad y porque se lo contaban

cuando hablaba con Robison o Nelcio, advirtiéndole que ella nunca visitó la casa de esta familia, pero que si pasaba por la casa de ellos y los saludaba y hablaba con ellos. Dice que cree que el canon de arrendamiento se lo pagaba Robinson directamente a la señora Margarita, situación que es habitual en la vereda, esto es pagar al dueño directamente, pero no conoce con precisión cómo se hacía el pago, ni el valor. Finalizó la testigo contradiciéndose en su dicho, pues expresa que no sabe o no recuerda si al momento de la muerte de Robinson, el señor Nelcio trabajaba, luego de que al inicio de la diligencia había expresado que no trabajaba.

Ahora, en el plenario también reposa prueba documental, dentro de la que se destaca la siguiente:

- Declaraciones extraproceso de la señora LUZ MARGARITA ARANGO RESTREPO, rendida el 8 de agosto de 2016, quien manifestó que era propietaria de una vivienda en el municipio de Caldas vereda el Salado parte bajo, propiedad que la tenía arrendada al joven Robinson quien le pagaba la suma de \$200.000 desde el 26 de febrero de 2012 hasta el **30 de agosto de 2014**. Finaliza diciendo que él era el encargado de la manutención de su padre y de su hermana. (03.2018-00393-anexos demanda fl.2). También reposa declaración extraproceso rendida por los señores PAULA ANDREA BUITRAGO GIRALDO Y WALTER DE JESUS GUZMAN PAVAS del 18 de marzo de 2014, quienes al unísono manifestaron que el joven Robinson Alexander siempre vivió con su padre, quien dependía económicamente de él (03.2018-00393-anexos demanda fl.3)
- Investigación administrativa realizada por PROTECCIÓN S.A. al momento de negar la pensión de sobreviviente (18 DE MAYO DE 2014). En esta documental se anota que el causante fue operario de maquina en la empresa Silicaucho devengando la suma mensual de \$580.000, de los cuales destinaba \$200.00 para el arriendo y \$150.000 para los gastos del hogar. También dice que el padre trabaja en oficio varios desde hacía 5 años en la Finca la María devengando \$616.000 al mes, de los cuales \$616.000 destina para gastos familiares.
- Información de historia laboral del joven Robison Alexander Santa Suaza expedida por la AFP Protección S.A., de la que se desprende que el afiliado inició su relación laboral con la empresa SILICAUCHO desde el mes de

agosto de 2011, hasta el momento de su deceso el 21 de febrero de 2014, lapso en el que devengó el salario mínimo mensual vigente de cada anualidad.

Valorada en su conjunto la prueba documental, testimonial y de interrogatorio de parte, concluye esta sala que si bien el joven Robinson podría haber aportado a su grupo familiar una ayuda económica, no está demostrada fehacientemente la dependencia económica del señor Nelcio respecto de su hijo, pues en el interrogatorio de parte, el demandante no fue nada colaborativo para esclarecer la verdad, pues trató de ocultar que se encontraba laborando al momento del deceso de su hijo, cambiando luego su repuesta indicando que sí laboraba para esa fecha y que los gastos del hogar los suplían él y su hijo, sin embargo, más adelante confiesa en su declaración que el aporte que realizaba su hijo Robinson era para sus propios gasto y consumos en el hogar.

Ahora en lo que corresponde a la prueba testimonial arrojando al litigio, tenemos la declaración de la señora Luz Margarita, quien a lo largo de su dicho se contradijo en varias de las respuestas dadas, indicando que no recordaba ciertas situaciones que le eran preguntadas, pero luego en el transcurso de la declaración manifestaba recordarlas, encontrándose varias contradicciones en su dicho, como fue el valor del canon de arrendamiento, el cual inicialmente dijo que era de \$300.000(minuto45:57) y luego al controvertir su declaración con lo consignado en declaración extraproceso que había rendido en notaria, la cual en un principio negó haber rendido, luego se retractó y dijo que si la había rendido, aclarando que el canon del arriendo había tenido varios valores durante los años que la familia vivió en su casa (\$150.000,\$190.000 y \$300.000). También asalta la duda para este cuerpo colegiado como la declarante quien no vivía en el municipio de Caldas, lugar de residencia de la citada familiar, sino que vivía en Medellín, tenía un conocimiento tan preciso respecto de que el joven Robinson era quien velaba por la manutención de su padre, argumentado que no solo pagaba arriendo, sino también servicios, mercado y el estudio de su hermana; sin embargo, cuando se le preguntó que a cuánto ascendía los gastos de hogar de Nelcio, la testigo se limitó a responder que Robinson pagaba todo lo de la casa, pero no indicaba con precisión los ingresos de Robinson y los valores que este daba en el hogar, siendo sus repuestas frente a estos temas evasivas y amañadas.

En lo que corresponde a la testigo Aura del Socorro tenemos que está también tenía un conocimiento general de lo que afirmaba, pues se limitaba a decir que Robinson velaba por los gastos de su casa, como arriendo, mercado y servicios, pero no sabía con precisión a cuánto ascendían estos gastos, indicando en un principio que el señor Nalcio no trabajaba y que por ello dependía de su hijo, sin embargo se contradijo finalizando su declaración ya que empezó a dudar si Nalcio trabajaba o no para esa época, encontrando este cuerpo colegiado que el dicho de esta declarante era amañado y poco profundo, pues no sabía con detalle la situación económica del grupo familiar del señor Nalcio, afirmando que nunca visitó la casa de esta familia, y que el conocimiento de su dicho fue en razón de las veces que conversaba con Robinson o Nalcio cuando pasaban por su casa.

Las testigos a lo largo de sus declaraciones se limitaron a decir que Nalcio dependía económicamente de su hijo, quien pagaba arriendo, servicios y mercado, siendo estos los únicos aspectos en los que insisten a lo largo de las versiones, sin dar mayores explicaciones siendo este el único dato del que tienen certeza, pues nada distinto conoce de la vida del fallecido, lo que resulta no ser cierto, pues el mismo demandante en el interrogatorio de parte confiesa que él, pagaba parte del arriendo, luego no existe medio de convicción que permita establecer cuál era el verdadero aporte suministrado por el occiso a sus progenitor y que ante la falta de este aporte haya desmejorado su calidad de vida, toda vez que las testigos no merecen ninguna credibilidad en sus dichos, pues es evidente que estaban parcializadas en favor del accionante.

Pero es más se desconoce a ciencia cierta quiénes confirmaban el grupo familiar del demandante y le causante, pues la testigo **LUZ MARGARITA ARANGO RESTREPO** manifestó que al momento de fallecer Robinson Alexander al momento de su deceso vivía con su padre, la hermana y la actual esposa del señor Nalcio, esposa esta a que no se hace mención por el actor.

Conforme lo que viene de decirse, contrario a lo afirmado en el recurso de alzada, a juicio de la Sala, la prueba testimonial no demuestra que el aporte dado por ROBINSON ALEXANDER fuera de la magnitud requerida para mantener el sustento del hogar, de manera que el padre dependiera necesariamente de éste para satisfacer las necesidades propias. Y es que se reitera que, de los dichos de las testigos, se puede colegir que tenían poco conocimiento de los pormenores de los

gastos de manutención del grupo familiar, pues todas sus afirmaciones siempre fueron muy generales, poco precisas y parcializadas.

De esta manera, analizada en su conjunto la prueba del plenario, la misma no da cuenta de la dependencia económica del demandante respecto de su fallecido hijo, y en razón a ello, a juicio de la Sala, no se probó razonadamente cumplir con el requisito antes referido que exigen las normas legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de padre del causante, porque si bien es cierto no se requiere dependencia total y absoluta y menos la indicación de cifras exactas, sí se debe demostrar fehacientemente y sin asomo de duda que el desaparecimiento de la contribución pone en riesgo una subsistencia digna del progenitor, lo que no se advierte de los medios de convicción allegados, siendo carga de la parte actora acreditar los supuestos de hecho invocados como fundamento de la acción en los términos de los artículos 164 y 167 del C. G. del P.

Conforme las consideraciones, fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se confirmará la decisión de primer grado.

Costas en esta instancia cargo del demandante y a favor de PROTECCIÓN S.A., por no haber prosperado el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1'160.000.

## 7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** íntegramente la sentencia del veinticinco (25) de septiembre de 2020, proferida por el JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **NELCIO DE JESÚS SANTA SANTA** contra la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo del demandante y a favor de PROTECCIÓN S.A. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1'160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **530626ad3089e0f36cb2a4ccf2ce98929de6ccb9dfc682f4ae778b00eaa41321**  
Documento generado en 31/03/2023 02:17:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>